



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
SALA TERCERA DE DECISIÓN**

Magistrado Ponente: César Enrique Gómez Cárdenas

Sincelejo, diez (10) de octubre de dos mil diecisiete (2017)

ACCIÓN: TUTELA
ACCIONANTE: NADIN ALBERTO FUENTES LÓPEZ.
ACCIONADO: ARMADA NACIONAL
RADICADO: 70001-23-33-000-2017-00246-00.
INSTANCIA: PRIMERA

OBJETO DE LA DECISIÓN.

Procede el Tribunal a resolver en primera instancia la acción de tutela promovida por el señor **NADIN ALBERTO FUENTES LÓPEZ** contra de la **ARMADA NACIONAL-DIVISIÓN DE NÓMINAS DE LA ARMADA**, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales de petición y debido proceso.

I. ANTECEDENTES.

1.1. LA SOLICITUD DE TUTELA.

El señor **NADIN ALBERTO FUENTES LÓPEZ**, formula acción de tutela en contra de la **ARMADA NACIONAL-DIVISIÓN DE NÓMINAS DE LA ARMADA**, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de **petición y al debido proceso**.

En amparo de los mismos, **pretende, (i)** se ordene al señor COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL y al señor JEFE DE LA DIVISIÓN DE NÓMINAS DE LA ARMADA NACIONAL, que dentro del término de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se sirvan dar respuesta de fondo a las peticiones formuladas en los numerales primero, segundo y tercero del derecho de petición presentado el día 29 de septiembre de 2016. **(ii)** se

ordene al señor COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL y al señor JEFE DE LA DIVISIÓN DE NÓMINAS DE LA ARMADA NACIONAL, que dentro del término de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se sirvan expedir las certificaciones solicitadas en el numeral cuarto del derecho de petición radicado el día 29 de septiembre de 2016 y que hasta la fecha no han sido expedidas, es decir: Certificación del último salario devengado en calidad de Infante de Marina Voluntario en el año 2003, Certificación del primer salario devengado en calidad de Infante de Marina Profesional en el año 2003 y Certificación del último salario devengado en el año 2016 y las prestaciones sociales que le fueron reconocidas y liquidadas en esa misma anualidad. **(iii)** Compulsar copias a quien corresponda con el objeto de que se investigue la conducta desplegada por el señor COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL y el señor JEFE DE LA DIVISIÓN DE NÓMINAS DE LA ARMADA NACIONAL, quienes con su proceder omisivo han incurrido en una falta disciplinaria sancionable de acuerdo a la ley.

Como **fundamentos fácticos** de la tutela, la parte accionante expresó:

Que, el día 29 de septiembre de 2016, presentó petición ante el señor Comandante de la Armada Nacional, con el fin de obtener el reconocimiento y pago del reajuste salarial y prestacional del 20% al que tiene derecho conforme a lo establecido en el artículo 1o, inciso segundo, del Decreto 1794 de 2000, y al mismo tiempo, solicitando la expedición de algunas certificaciones de carácter laboral.

Aduce que, mediante Oficio N° 20160423330539181 del 24 de noviembre de 2016, suscrito por el señor Jefe de la División de Nóminas de la Armada Nacional, la entidad contestó parcialmente el referido derecho de petición.

Que con relación a las peticiones contenidas en los numerales primero, segundo y tercero del escrito petitorio, la entidad se pronunció manifestando lo siguiente: *"(...) se están adelantando las respectivas consultas administrativas ante el Ministerio de Defensa y el Departamento Administrativo de la Función Pública, una vez esté definida la situación, se procederá a resolver de fondo su petición. (...)"*

Expone el actor que, en cuanto a lo peticionado en el numeral cuarto, se tiene que únicamente expidieron la certificación de tiempo de servicio,

indicando que, para proceder a la expedición de las demás certificaciones solicitadas, previamente se debía consignar el valor de las mismas, conforme a lo indicado en el referido oficio.

Asegura, que solo la petición formulada en el numeral quinto fue atendida en debida forma.

Señala, que una vez transcurridos seis meses desde que la Armada Nacional emitió su respuesta y ante la falta de un pronunciamiento de fondo con respecto a las peticiones contenidas en los numerales primero, segundo y tercero del escrito petitorio, encaminadas a obtener el reconocimiento y pago del reajuste salarial y prestacional del 20% al que tiene derecho el accionante, nuevamente se requirió a la entidad en tal sentido, a través de derecho de petición dirigido al señor Jefe de la División de Nóminas de La Armada Nacional, radicado el día 24 de mayo de 2017, escrito al que también se anexó el respectivo comprobante de consignación de la suma señalada para efectos de expedir las certificaciones que habían quedado pendientes.

Indica que han pasado más de tres meses desde el mencionado requerimiento, sin que hasta la fecha la Armada Nacional se haya pronunciado de fondo sobre las peticiones formuladas en los numerales primero, segundo y tercero del derecho de petición inicial (Certificación del último salario devengado en calidad de Infante de Marina Voluntario en el año 2003, Certificación del primer salario devengado en calidad de Infante de Marina Profesional en el año 2003 y Certificación del último salario devengado en el año 2016 y las prestaciones sociales que le fueron reconocidas y liquidadas en esa misma anualidad).

1.2. ACTUACIÓN PROCESAL.

La acción de tutela fue presentada el 26 de septiembre de 2017 (folios 7 y 21), por reparto correspondió al Tribunal Administrativo de Sucre. Conforme nota Secretarial, se le puso en conocimiento de la misma al despacho conductor el 27 de septiembre de 2017 (folio 22). Mediante auto del 28 de septiembre de 2017 se admitió la acción, ordenándose la notificación a las entidades accionadas y concediéndoles el término de (2) días para que se pronunciaran frente a lo expuesto (folio 23).

La entidad accionada fue notificada el 29 de septiembre de 2017 (folio 24), quien contesta y rinde informe el 04 de octubre de 2017 (folios 29 a 31).

1.3. INFORME RENDIDO POR LA ENTIDAD ACCIONADA¹.

La accionada en su informe a este Tribunal expresó que, la petición fue contestada mediante oficio No. 20160423330539181/ MD-CGFM- CARMA-SECAR-JEDHU-DIPER-DINOM-1.10 de fecha 24 de noviembre de 2016, en el cual se informó que se estaban realizando los respectivas consultas administrativas para su reconocimiento, motivo por el cual no podía darse un respuesta de fondo a su solicitud y se suministra copia de la documentación requerida.

Igualmente, mediante escrito radicado el día 24 de mayo de 2017, solicita respuesta de fondo a la petición anteriormente mencionada, la que por un error involuntario no fue debidamente contestada y tramitada, por lo que se procedió a dar respuesta de forma inmediata mediante Oficio No. 2017042333245431/ MD CARMA-SECAR-JEDHU-DIPER-DINOM-1.10 de fecha 02 de octubre de 2017, enviándose al correo electrónico fitzgeraldarrieta@hotmail.com

Expresa que la Armada Nacional a través de la División de Nómina siempre ha buscado dar cumplimiento a los requerimientos elevados por los peticionarios. Sin embargo, por causa de un error involuntario no se dio respuesta dentro de los quince (15) días siguientes a la radiación de la misma, por lo que se procedió a dar respuesta de forma inmediata mediante oficio No. 2017042333245431/ MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DIPER-DINOM-1.10 de fecha 02 de octubre de 2017, en el cual se informó que se procedió a reajustar su salario en un 20% a partir de la nómina del mes de junio de 2017, así mismo y respecto a las mesadas en las cuales no operó el fenómeno de prescripción, serán liquidadas e incluidas en vigencias expiradas y nómina adicional, dependiendo el caso, las cuales serán canceladas una vez se apruebe el presupuesto para ello, dando respuesta de fondo a la petición.

¹ Folio 29 a 31.

Por lo anterior, solicita se declare la improcedencia de la actual acción de tutela, ya que si bien la División de Nóminas no procedió a dar respuesta a la petición dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de radicación, se contestó mediante oficio No. 2017042333245431/ MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DIPER-DINOM-1.10 de fecha 02 de octubre de 2017, presentándose de esta la figura de hecho superado.

Así mismo, aduce que la respuesta dada al accionante, si bien puede que no satisfaga de manera completa las pretensiones de este, obedece que para su pago se requiere la apropiación presupuestal, la cual requiere un trámite administrativo de conformidad a lo establecido en el artículo 67 del Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016 y Circular del Ministerio de Defensa No CIR2017-144 del 02 de marzo de 2017.

Conforme a lo anterior y lo manifestado por la Corte Constitucional en varias de sus sentencias, el derecho de petición consagrado en nuestra carta política tiene como objeto resolver de fondo las peticiones elevadas por los ciudadanos ante entidades públicas o privadas, ya sean éstas positivas o negativas, no puede desconocer la incidencia de eventualidades que obstaculicen o impidan su cumplimiento, en vigor de aquella máxima del derecho que ordena: "nadie está obligado a lo imposible.", como en el presente caso, ya que si bien es cierto debe darse una respuesta de fondo a lo solicitado, la Armada Nacional no tiene los rubros presupuestales para su pago.

2. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL.

2.1. COMPETENCIA.

El Tribunal es competente para conocer en **Primera Instancia** de la presente acción al tenor del artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991.

2.2. PROBLEMA JURÍDICO.

Teniendo en cuenta los hechos y las circunstancias descritas en los antecedentes, se contrae a establecer el Tribunal en esta oportunidad, *¿Si en el sub judice hay lugar a amparar el derecho fundamental incoado como vulnerado por la parte actora, o si por el contrario, de conformidad con lo*

manifestado por la accionada y pruebas obrantes en el expediente, los hechos que motivaron la interposición de la acción ya han sido superados?

2.3. ANÁLISIS DE LA SALA Y RESPUESTA AL PROBLEMA JURÍDICO.

I. GENERALIDADES DE LA ACCIÓN DE TUTELA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.

La **TUTELA** es un mecanismo concebido por la Constitución de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, con las características previstas en el inciso final del artículo 86 de la Carta Política y dentro de los casos descritos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que reglamenta su ejercicio.

La acción de amparo, permite que toda persona por sí misma o por quien actúe a su nombre, tenga una acción constitucional para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos previstos en la ley y sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, agregando a renglón seguido que dicha protección consistirá *"en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo"*.

En ese orden, para que la protección constitucional en sede de tutela proceda, no basta que se compruebe la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales, sino que es indispensable que el solicitante de la tutela no cuente con otro medio de defensa judicial al que pueda acudir para lograr su protección, a no ser que utilice el mecanismo para evitar un perjuicio irremediable².

Por su naturaleza residual y subsidiaria, no está diseñada para reemplazar las acciones o vías judiciales ordinarias a las cuales la persona puede acudir para hacer valer sus derechos. La acción de tutela como mecanismo de protección

² Corte Constitucional, Sentencia T-983 de 13 de septiembre de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza.³⁻⁴

Por ello, se puede igualmente señalar que, la acción de tutela adquiere el carácter subsidiario, con el fin de convertirse en el último recurso orientado a reemplazar los vacíos de defensa que en determinadas circunstancias se presentan y que afectan derechos fundamentales.

Es necesario para efectos de proteger un derecho y ordenar a una autoridad o a un particular actuar o abstenerse de hacerlo que, previamente exista un derecho fundamental atribuido a quien solicita el amparo y, además, que la entidad demandada, teniendo la obligación de satisfacer el derecho, actúe o se abstenga de hacerlo generando una vulneración o amenaza al mismo. Lo expuesto es un presupuesto esencial para la procedencia de la acción de tutela, pues a) si no existe un derecho atribuido al accionante, la entidad accionada no podría atentar contra el mismo; o b) constatándose un derecho en cabeza del demandante, si la entidad accionada no ha efectuado ninguna conducta -acción u omisión- que trasgreda el derecho, no habría así un acto de reproche que obligara al juez ordenar una protección.

Así entonces, es necesario para la procedencia de la acción de tutela verificar la existencia de una acción u omisión actual de las autoridades o de un particular que vulnere o amenace un derecho fundamental, esto es, se debe constatar que la referida trasgresión es cierta, no hipotética, ni eventual o presunta.

Bajo esta premisa la Corte Constitucional⁵ ha definido que la acción u omisión que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito lógico jurídico y que la misma no es procedente bajo una mera suposición; pues no se puede llegar al absurdo de acudir a la acción de tutela sobre la base

³ Ver entre otras, CORTE CONSTITUCIONAL, sentencias C-543 de 1992, T-331 de 1997, T 106 de 1996 y T 119 de 1997.

⁴ CORREA HENAO, Néstor Raúl. Derecho procesal de la acción de tutela. Editorial, ediciones jurídicas Ibáñez, Tercera edición 2009. Pág. 84.

⁵ T-883-08; T- 013-07; SU-975-03; T- 066-02, entre otras.

de actos que no se han proferido, ya que con ello se violaría el debido proceso de los sujetos pasivos de la acción; la garantía de un orden justo y el principio de seguridad jurídica.

Al respecto:

"El objeto de la acción de tutela es la protección efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, "cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares". Así pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en cuestión.

...

En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003[18] o la T-883 de 2008, al afirmar que **"partiendo de una interpretación sistemática, tanto de la Constitución, como de los artículos 5º y 6º del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acción u omisión cometida por los particulares o por la autoridad pública que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito lógico-jurídico para la procedencia de la acción tuitiva de derechos fundamentales (...)** En suma, para que la acción de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (...)", ya que "sin la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (...)"

Y lo anterior resulta así, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipotéticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jurídico, "ello resultaría violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acción, atentaría contra el principio de la seguridad jurídica y, en ciertos eventos, podría constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitiría que el peticionario pretermitiera los trámites y procedimientos que señala el ordenamiento jurídico como los adecuados para la obtención de determinados objetivos específicos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos"

Así pues, cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violación de un derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acción de tutela."⁶ (Destacado de la Sala).

II. DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN.

El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, en los siguientes términos:

"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución".

⁶ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-130 de 2014. M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ.

Derecho sobre el cual la Corte Constitucional ha afirmado, que “es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa y se garantizan otros derechos constitucionales, como el derecho a la información, a la participación política y a la libertad de expresión”⁷

En reiterada jurisprudencia⁸, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional ha sostenido, que en la pronta resolución, por parte de la autoridad a quien se dirige la petición, más no en la formulación, que no deja de ser un aspecto formal, es donde este derecho fundamental adquiere toda su dimensión (núcleo esencial) como instrumento eficaz de la participación democrática, ya que así recibe información y hace efectivo el resto de los derechos fundamentales.

La H Corte Constitucional⁹ que el núcleo esencial del derecho de petición, comprende los siguientes elementos¹⁰: “i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas (núcleo esencial)¹¹; ii.) Una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados y iv.) Una pronta comunicación de lo decidido al peticionario, independientemente de que la respuesta sea positiva o negativa, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido”.

⁷ Corte Constitucional, sentencia T 630 de 2002.

⁸ Entre ellas, la Sentencia T- 495 de 1992.

⁹ Ver entre otras las sentencias T-220 de 1994; T-515 de 1995; T-309 de 2000; C-504 de 2004; T-892, T-952 y T-957 de 2004. Ver, Corte Constitucional, sentencia T 207 de 2007. Igualmente consultar T-213 de 2005, T-657, T-658 y T-692 de 2004, T-119 de 1993, T-663 de 1997, T-281 de 1998 de la misma Corporación.

¹⁰ Ver sentencias T-944 de 1999 y T-447 de 2003. En la sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, retomada recientemente por las sentencias T-855 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-734 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-915 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, entre otras, se delinearón algunos supuestos fácticos mínimos del derecho de petición, que han sido precisados en la jurisprudencia de esta Corporación, mediante sus diferentes Salas de Revisión.

¹¹ Es abundante la jurisprudencia existente sobre el núcleo esencial del derecho de petición. Se pueden consultar, entre las más recientes las siguientes: T-091, T-099, T-143, T-144, T-144 y T-1099 de 2004.

En esa dirección, la respuesta debe resolver de manera precisa y completa el escrito sometido a consideración de la autoridad¹² y, por ende no se considera satisfecho este derecho, cuando la administración da respuestas evasivas o se limita a la simple afirmación que el asunto se encuentra en revisión, porque "el derecho de petición se materializa cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite respuesta a lo requerido, respetando el término concedido para tal efecto; aclarando que esa garantía no sólo implica que la solución al petitum se emita dentro del plazo oportuno, sino que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, que resuelva la cuestión sometida a estudio, sea favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; ii) ser congruente frente a la petición elevada; y, iii) ser puesta en conocimiento del solicitante. Entonces, si la respuesta emitida por el ente requerido carece de uno de estos tres presupuestos, se entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el derecho fundamental"¹³

Quiere decir lo anterior que el derecho de petición se satisface sólo con las respuestas, que deciden, que concluyen, que afirman una realidad, que satisfacen una inquietud, u ofrecen certeza al interesado (Sent. T-439 de 1998). Por lo tanto, se revela vulneración de este derecho constitucional, cuando no hay respuesta a la petición formulada o cuando su resolución es tardía.

Ahora bien, la norma superior (Art. 23) no estipuló dentro de qué término las autoridades deben resolver prontamente, pero dicho tiempo o período para obtener la respuesta le fue dejado a la ley, que por regla general está dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, que establece un plazo de quince (15) días para dar respuesta a las solicitudes de contenido particular, diez (10) días, para solicitar documentos e información y treinta (30) días para solicitudes relacionadas con consultas. En caso de no

¹² Ver sentencia T -166 de 1996, donde se señaló: "...ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido de sostener que el derecho de petición no se ve satisfecho simplemente porque la autoridad ante la cual se eleva la solicitud se limite a responder y menos a acusar recibo, sino que debe producirse una respuesta que guarde relación con lo solicitado, sin que ello implique necesariamente, que ella deba ser favorable; es decir, que el funcionario competente está en la obligación de analizar a fondo la petición para emitir una respuesta que guarde relación directa con lo solicitado en la misma"

¹³ Corte Constitucional, sentencia T 490 de 2007.

recibirse respuesta de fondo por parte de las autoridades dentro del término señalado, se vulnera el derecho de petición constitucionalmente protegido.

La Ley 1755 de 2015, al respecto estableció:

Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. *Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.*

*Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, **se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.***

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. *Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. *Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. (NEGRILLAS FUERA DEL TEXTO).*

La lectura del artículo en cita pone de relieve que el derecho de petición acompañado con el artículo 74 de la Constitución¹⁴, en una de sus modalidades puede ser utilizado para obtener copias de documentos, como instrumento necesario para el ejercicio del derecho a la información. Por ende, la efectividad del derecho a obtener copias resulta también como una manifestación concreta del derecho a obtener pronta resolución a las peticiones formuladas que también hace parte del núcleo esencial del derecho de petición.

En ese orden, se tiene claro que, la respuesta puesta en conocimiento, debe resolver de fondo el asunto, atendiendo a los principios de suficiencia, congruencia y efectividad del derecho de petición, lo que no quiere decir que la misma tenga que ser positiva frente a lo solicitado, basta con que la misma resuelva materialmente y satisfaga la necesidad, con sujeción a los requisitos antes mencionados.

III. CASO CONCRETO.

Como se expresó previamente, al Tribunal le corresponde examinar si de las situaciones descritas por el accionante y lo acreditado en el expediente, se puede concluir que los derechos fundamentales invocados fueron vulnerados o si por el contrario en el sub iudice, se ha configurado un hecho superado, como lo arguye el ente accionado.

De conformidad con las pruebas documentales que reposan en el expediente, se puede confirmar que el 29 de septiembre de 2016, el demandante por conducto de apoderado, elevó en ejercicio del derecho de petición, solicitud al Comandante de la Armada Nacional, en el sentido que se le reajustara su asignación salarial y que se expidiera Certificación del último salario devengado en calidad de Infante de Marina Voluntario en el año 2003, Certificación del primer salario devengado en calidad de Infante de Marina Profesional en el año 2003 y Certificación del último salario devengado en el año 2015 y las prestaciones sociales que le fueron reconocidas y liquidadas en esa misma anualidad (folio 9-10).

¹⁴ "ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley".

Es un hecho cierto que la accionada emite como respuesta a la anterior solicitud el Oficio N° 201604233305399181 del 24 de noviembre de 2016, el cual es suscrito por el JEFE DE LA DIVISIÓN DE NÓMINAS DE LA ARMADA NACIONAL, respuesta en la cual según el actor, no se absolvió de manera completa su requerimiento (folio 13).

También se encuentra demostrado que el actor presenta una petición el día 24 de mayo de 2017, solicitando al Jefe de la División de Nóminas de la Armada Nacional, que le expidiera la Certificación del último salario devengado en calidad de Infante de Marina Voluntario en el año 2003, Certificación del primer salario devengado en calidad de Infante de Marina Profesional en el año 2003 y Certificación del último salario devengado en el año 2016 (folio 15-16).

Ahora, la Armada Nacional en el informe que rinde a este Tribunal manifiesta que ya se le dio respuesta de fondo a lo peticionado por el actor, mediante Oficio No. 2017042333245431/ MD-CGFM-CARMA- SECAR-JEDHU-DIPER-DINOM-1.10 de fecha 02 de octubre de 2017 (folio 32).

Una vez observado el Oficio No. 2017042333245431/ MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DIPER-DINOM-1.10 de fecha 02 de octubre de 2017, contentivo de la respuesta al derecho de petición de fecha 24 de mayo de 2017, se puede decir que en efecto, mediante este se le está dando alcance al resto de los numerales petitorios que según el actor no le habían sido resueltos con el primer oficio, pues con este se anexan las certificaciones solicitadas (folio 34, 35, 36 y 37).

En este orden de ideas, se puede establecer que en *sub examine* se configuró el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado¹⁵, ya que lo pretendido por el actor fue satisfecho por la entidad accionada previo al presente pronunciamiento, perdiendo la acción de tutela su razón de ser, por cuanto al no existir un objeto jurídico tutelable, en razón de la extinción de la alegada amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, la orden

¹⁵ En sentencia SU- 540 de 2007, la Corte lo definió así: "El hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que "carece" de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela. (...) (Subrayas fuera del original).

que profiera el juez de tutela carecerá de sentido, eficacia, inmediatez y justificación.

Lo anterior, de conformidad con los pronunciamientos de la H. Corte Constitucional sobre la configuración del hecho superado dentro del trámite de la acción de tutela, en los que se **reitera**¹⁶:

"...El objetivo de la acción de tutela, conforme al artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, al Decreto 2591 de 1.991 y a la doctrina constitucional, es la protección efectiva y cierta del derecho constitucional fundamental, presuntamente vulnerado o amenazado por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos expresamente señalados por la ley.

En virtud de lo anterior, la eficacia de la acción de tutela radica en el deber que tiene el juez, en caso de encontrar amenazado o vulnerado un derecho alegado, de impartir una orden de inmediato cumplimiento orientada a la defensa actual y cierta del derecho que se aduce.

No obstante lo anterior, si la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superado en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia y por lo tanto razón de ser.

...la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan características totalmente diferentes a las iniciales". ¹⁷(Negrilla de la Sala, para resaltar)

Como se advierte, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, siendo entonces que lo que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna; lo que de suyo conlleva la satisfacción de la pretensión de la acción constitucional interpuesta.

¹⁶ Sentencia T-1100 de 2004, Sentencia T-519 de 1992, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo. Cfr. reiteración., entre muchas otras, en las Sentencias T-100 de 1995 M.P., Vladimiro Naranjo Mesa; T-201 de 2004 M.P., Clara Inés Vargas Hernández; T-325 de 2004 Eduardo Montealegre Lynett, T-051 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-188 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-262 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Corte Constitucional, Sala de Revisión, sentencia T-296 del 16 de junio de 1998.

¹⁷ Se puede consultar entre otras, Sentencias T-233 de 2006, T-1035 de 2005, T-935 y T-936 de 2002, T-1072 de 2003, T-539 de 2003, T- 923 de 2002, T-1207 de 2001, T-428 de 1998

Consecuente con lo argumentado, para este Tribunal el hecho vulnerador ha cesado, desapareciendo por tanto el mismo y por tanto se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.

3. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

FALLA

PRIMERO: DENIÉGUESE el amparo solicitado en la presente acción de tutela presentada por **NADIN ALBERTO FUENTES LÓPEZ**, por haberse materializado en el curso de la actuación la **CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.**

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE por el medio más expedito esta decisión a la parte actora, a los accionados y al agente delegado del Ministerio Público.

TERCERO: Si el presente fallo no es impugnando, **ENVÍESE** el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. En firme el fallo ordénese el archivo definitivo, previa las anotaciones en el sistema información judicial.

Esta Sentencia se discutió y aprobó en sesión de Sala Extraordinaria conforme consta en el Acta extraordinaria N° 174 de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

CÉSAR ENRIQUE GÓMEZ CÁRDENAS

RUFO ARTURO CARVAJAL ARGOTY

SILVIA ROSA ESCUDERO BARBOZA